

nueva (re)lectura que se hablará y se escribirá de otra manera, y se crearán las condiciones para el surgimiento de una entidad como la Fundación Andreu Nin que, a pesar de sus limitaciones, ha ido haciendo un trabajo por establecer unos mimbres que los múltiples destrozos de las derrotas habían destrozado.

José Gutiérrez es cofundador y vicepresidente de la Fundació Andreu Nin, y autor de varias obras sobre el POUM, como *Una rama de rosas rojas y una foto. Variaciones sobre el proceso del POUM*. Barcelona: Laertes, 2009.



8. Su memoria, su dignidad, su lucha: la nuestra

Universidad, memoria e impunidad. Una breve etnografía complutense

Ariel Jerez

En la Universidad, los sectores progresistas no hemos realizado el incómodo esfuerzo de valorar los silencios y omisiones de nuestra institución en relación al pasado, ni en qué medida el pensamiento crítico habría podido contribuir a reelaborar nuestra traumática experiencia compartida. Se puede decir que la Universidad, en términos comparados, ha aportado poco —con honrosas excepciones individuales— y, más bien al contrario y en buena medida, ha sido cómplice activa en esta estrategia de silenciamiento. Y es pertinente señalar que, dependiendo de sus articulaciones socio-institucionales y políticas, la Universidad puede ser un agente con muy distinta capacidad de incidencia y difusión en las cuatro arenas culturales sobre las que discurre la sociedad de la información: sistemas educativos, industrias culturales, medios de comunicación y políticas culturales.

En una sociedad tan mediatizada, tendemos a olvidar que este viejo espacio de producción de información y conocimiento sigue siendo clave en la producción de política cultural y, por ende, de cultura política. Según sean sus mimbres críticos, contribuye de manera más o menos efectiva a transformar el pensamiento dominante y a mover sus pesadas inercias para abrir nuevos horizontes de transformación. Un motor fundamental de lo que deberían ser los *think tanks* progresistas que, de serlo, nunca podrían contar con el dinero corporativo con el que cuentan los de la derecha, que se permite la privatización de la producción de conocimiento como baza fundamental de su nueva estrategia política antideliberativa.

En las líneas que siguen, me planteo realizar una suerte de breve incursión etnográfica en la Complutense en relación con el discurso sobre la Transición, en torno a tres entradas: la situación teórica marginal del pensamiento crítico; las agendas de investigación y una perspectiva generacional.

Pensamiento crítico, teoría y política

Los marcos consensuales de la Transición marginaron el pensamiento crítico que ya de por sí estaba debilitado tras cuatro décadas de control ideológico y cultural del régimen franquista sobre la sociedad en general y sobre la universidad en particular.

Hubo una generación de profesores, cuyo posicionamiento político en su juventud estudiantil pudo estar mayoritariamente cercano a los enfoques antifranquistas, que por edad protagonizan políticamente las dinámicas que desaguan en los pactos de la Transición y que, con distinto grado de conciencia estratégica, difunden los marcos consensuales que legitimarían dichos pactos. Esto trajo consigo un proceso de distanciamiento, aislamiento y marginación, muchas veces estigmatizador, de las perspectivas críticas de otros muchos profesores y estudiantes que intentaron cuestionarlos. Una primera barrera fue ponérselo difícil a los que deberían haber vuelto del exilio, entre los que había pensadores críticos fundamentales.

La “generación de la democracia” en buena medida ha quedado huérfana de maestros críticos debido al control sobre los dispositivos de reproducción académica y las inercias de una cultura institucional autoritaria (la funcionarial, marcada por la jerarquía y antigüedad, presente en la elección de cargos académicos, en la selección de candidatos a nuevas plazas, en elección de asignaturas y manuales de referencia, en los comités de evaluación de proyectos de investigación, publicaciones, congresos; actividades extraacadémicas como ciclos de conferencias, comisariado de exposiciones, premios y cargos institucionales, vida sindical y política universitaria, etc.). En estas circunstancias, en la micropolítica universitaria fue tomando forma el “pacto de silencio” que muchos catedráticos dicen desconocer con el cuestionable argumento de que en este país “todo el mundo podía publicar lo que quería”. Tras el oscuro golpe de Estado de 1981, todo el mundo con “sentido común” había terminado de entender que era necesario alejarse de un pasado marcado por la tragedia y que, responsablemente, había que enterrarlo para no correr riesgos y para evitar “reabrir heridas”. Una década después, el desplome del socialismo real y la consecuente crisis ideológica del marxismo de Estado y de los imaginarios de transformación social venían a reforzar este control de los que pragmáticamente ya habían abandonado compromisos con el pensamiento crítico emancipador.

De esta manera, la Universidad parece haberse permitido, durante más de tres décadas de democracia, no pensar –es decir, ignorar– las consecuencias del peso cultural y sociológico del franquismo en los distintos planos y niveles de la realidad de nuestra joven democracia. Tampoco ha querido valorar cómo pesan

estas consecuencias en los marcos teóricos con los que investigamos, en los contenidos que enseñamos y en cómo nos relacionamos con el estudiantado. Sin duda son déficit de información, acción y reflexión que también es parte constitutiva de la crisis multidimensional que atravesamos, que trenzan aspectos intelectuales, educativos y culturales relevantes desde el punto de vista de una resolución ciudadanista y democrática, por lo que desde el campo progresista estamos abocados a atenderlos.

El pensamiento crítico es radical al analizar las dinámicas sociales, porque aborda la capacidad configuradora de las diferentes instancias de poder social en su permanente disputa por la orientación de los campos por los que discurre el orden sociopolítico. Mantiene una doble perspectiva, por un lado el pacto cultural por una racionalidad democrática y emancipadora, y por otro, el análisis de hegemonías del poder entre las distintas articulaciones micro y macro del poder social; entre ellas, las que se producen al interior de la universidad, desde sus aulas a sus rectorados, y su tarea de “puente hacia la sociedad”, esa acción institucional tan poco desarrollada en nuestro país que es la “extensión universitaria”. Es decir, los que disfrutamos del pensamiento crítico en nuestra vida apostamos por creer en la “democracia”, el “derecho”, la “justicia”, el “socialismo”, la “igualdad”, la “libertad”, la “excelencia académica”, la “innovación pedagógica” y tantas otras cuestiones en las que nos apoyamos y trabajamos para emanciparnos, pero sin dejar de (re)conocer e intentar incidir en las dinámicas de poder sobre las que descansan, buscando regular sus estrategias perversas en un contexto crecientemente competitivo, que tiende a vaciar de contenido estas nobles palabras.

La capacidad de comprender y trabajar sobre estos procesos simbólicos y discursivos de la realidad social tiene una evidente dimensión teórica, donde la racionalidad interna de las diversas narrativas amplía, o no, la capacidad explicativa sobre fenómenos y procesos sociales siempre complejos. Parcelamos, aprehendemos, seleccionamos campos teóricos, perspectivas metodológicas y objetos de estudio y, como servidores públicos dedicados a la ciencia se le presupone a la explicación que construimos un interés público de importancia para el conjunto de la sociedad. Dependiendo de la ósmosis de la universidad con su entorno social, muchas veces el conocimiento científico –sobre todo en ciencias sociales– puede quedar preso de intereses de las instituciones que pagan los estudios y de los intereses profesionales que los realizan. El pensamiento crítico institucionalmente incardinado y conectado a las agendas de los movimientos sociales es la única vacuna contra este peligro. De ahí la necesidad de seguir exigiendo pluralismo teórico y metodológico, hoy amenazado por los criterios mercantilizadores que quieren imponerse también en la universidad.

Desde este ángulo se puede observar no sólo su debilidad institucional, sino incluso la escasa circulación de autores clave del marxismo y de otras escuelas críticas normalizadas en otras latitudes universitarias. Por ejemplo, en comparación con facultades de ciencias sociales latinoamericanas o europeas, es llamativo el

“... la Universidad parece haberse permitido, durante más de tres décadas de democracia, no pensar –es decir, ignorar– las consecuencias del peso cultural y sociológico del franquismo en los distintos planos y niveles de la realidad de nuestra joven democracia”

amplio desconocimiento de clásicos como Antonio Gramsci, Michel Foucault o los autores que en distintos campos han problematizado el “giro semiótico” que ha marcado el desarrollo teórico crítico en los estudios culturales, postcoloniales, de género y los sistemas mundo. También el escaso interés suscitado por el instrumental metodológico aportado por la sociología histórica para abordar la compleja causalidad múltiple que gravita sobre los cambios institucionales y políticos en el largo plazo de la construcción estatal –la deseada democracia como proceso, conflictivo y siempre inacabado, de domesticación del capital y la coerción en competición interestatal–. En términos institucionales los agrupamientos de investigadores en líneas críticas son jóvenes, escasos y limitados, con recursos irrisorios si los comparamos con los proyectos *mainstream*, con contados “puentes generacionales” y

con agendas de investigación con baja politización o de politización sectorializada (cómo en el caso de los estudios de género, sexualidad o cibercultura).

Por el contrario, podemos constatar el incontestado predominio teórico de escuelas convencionales de matriz liberal-funcionalista, donde dominan desarrollos pobres que tienden a emplazarse como “argumentos de autoridad” académica con la importación aproblemática de debates transnacionalizados –como por ejemplo, democracia procedimental, gobernabilidad, gobernanza–. La solidez de su presencia en buena medida se debe a su articulación con el sistema estatal –y privado corporativo– de producción de información sociológica y de opinión pública. Un corpus de datos que, ante la ausencia de pensamiento crítico y la consiguiente capacidad de experimentación innovadora, mantiene graves deficiencias y asimetrías –sobre todo para explicar las dinámicas crecientemente sorprendentes en una fase de crisis como la actual–.

Estas coaliciones de intereses profesionales e ideológicos, de manera más o menos activa, potencian la compartimentación temática y teórica de los departamentos, donde se premian las perspectivas afines y se marginan las críticas. Lastrando así la innovación transdisciplinar que debería cruzar con toda naturalidad campos como la sociología, la ciencia política y la antropología, incluso la economía, la filosofía, las relaciones internacionales y el derecho. No puede sorprender por tanto una producción científica escasamente innovadora y creativa, como insisten en señalar diversas evaluaciones internacionales. Como hemos tenido oportunidad de comprobar en las universidades extranjeras, el progreso académico exige dialogar y buscar complementariedades en el campo de las ideas, premiando institucionalmente el pluralismo teórico-metodológico.

Alineamientos de los defensores del *status quo*

No se puede perder de vista también que los comportamientos descritos confunden gravemente el debate público. Porque en la medida en que los “objeto de estudio” se tensionan por las demandas sociales, politizándose, parece romperse la torre de cristal del científico. Sólo ya puede defender su autoridad –que en esta situación no puede ser más que de manera autoritaria– reclamando el monopolio del conocimiento profesional y negándose a reconocer al aportado por otros actores, acusados de no científicos, pero que legítimamente quieren intervenir en un debate que es también intelectual y político.

Sin duda, este debate además es agrio y produce sorpresas: finalmente el realineamiento no está siendo el de los historiadores científicos con el movimiento de víctimas y familiares que lo intentan abrir, sino con los tan denostados historiadores amateurs, pero los del sector revisionista. Comparten los marcos de equiparación de víctimas y responsabilidades entre los dos “bandos” –la violencia de los revolucionarios como los verdaderos responsables del fracaso de la República, y por consiguiente de la guerra– y en la defensa de la ejemplaridad de la Transición –vinculada a la existencia de una reserva de razón ponderada y liberal, encarnada en la generación del 56, que produjo la única reconciliación posible–. Fue explícito cuando Pío Moa saludaba que Santos Juliá, en sus filigranas argumentales, había terminado llegando al punto de partida defendido por la llamada “brunete mediática”. Pero más cuando toda una serie de personajes públicos muy reconocibles de trincheras hasta ahora opuestas (el grupo Prisa alineando sus mayores articulistas, además del propio Juliá, Savater, Pradera o Cercas coincidían con los habituales postulados de Moa, César Vidal o Jiménez Losantos y sus decenas de plumillas replicantes) se unían para descargar su artillería sobre “vengativos” e “irresponsables” nietos, cuya estrategia de “argentinización” para convertir en desaparecidos (una figura jurídica) a nuestros “paseados” (metáfora elusiva del crimen), podía volver a dar al traste con el diálogo y reconciliación pactados en la Transición.

Unos y otros coinciden en que los reclamos básicos de derechos humanos –verdad, justicia y reparación– ponen en peligro nuestra democracia, a setenta y cinco años de distancia de la guerra y a más de treinta años de haber finalizado la dictadura. En última instancia, se mantiene en el plano intelectual la larga coalición política que, sobre este particular, también mantienen el PP y el PSOE. Políticos e intelectuales ignoran toda discusión sobre la voluntad de justicia de este movimiento social y sobre su capacidad transformadora.

La construcción continua de la narrativa, la batalla contra la impunidad

Las disputas por la memoria implican poder contar con los distintos grupos sociales, saber qué significa para ellos el pasado y en qué medida se relaciona con su presente y futuro. Una sociedad democrática está abocada a integrar constante-

mente en nuevas narrativas esta diversidad de voces, cuyo fin último es recrear la comunidad política de referencia. Evidentemente implica renovación de discursos y reacomodos institucionales difíciles para algunas biografías colmadas de autocomplacencia y que, en cierta manera, pretenden la impunidad discursiva que les permita continuar eludiendo constantemente la crítica deliberativa.

La lucha contra la impunidad ha sido un vector clave del pensamiento democrático y republicano moderno, que defiende el imperio de la ley –y la igualdad ante ésta– como forma de frenar los abusos de los más fuertes, del gobierno y de las mayorías cuando se vuelven prepotentes. En una coyuntura de crisis como la que atravesamos, donde los poderosos no tienen escrúpulos en volver a explotar el miedo al otro y las identidades esencialistas, es necesario reclamar a la universidad su papel crítico y contenedor. Sin duda, la lucha contra la impunidad del fascismo ha estado marcada históricamente por la correlación de fuerzas en los tableros políticos e ideológicos. Parece oportuno aprovechar hoy la *cultura de los derechos humanos* como herramienta para construir racionalidad jurídica para un nuevo pacto político-cultural del cual sería dramático que la universidad española pretendiera seguir estando al margen. ¿Hasta cuándo?

Ariel Jerez es Profesor de Ciencia Política UCM y colaborador en la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo.



9. Su memoria, su dignidad, su lucha: la nuestra

¿De quien es el poder de contar? A propósito de las polémicas públicas sobre memoria histórica

Sebastiaan Faber, Pablo Sánchez León y Jesús Izquierdo Martín

De un tiempo a esta parte, la prensa española se ha convertido en un campo donde se batalla sobre la relación entre el pasado reciente español y la legitimidad de nuestra democracia. Aprovechando, como viene siendo habitual, una nueva conmemoración del fracasado golpe de Estado contra la Segunda República, la discusión ha retornado con cierta virulencia. Desde el texto publicado en *El País* por Joaquín Leguina (24/06) hasta el editado en *Libertad*